

Sala declara inconstitucional las condiciones de hacinamiento en centros de reclusión

La Sala de lo Constitucional declaró que es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud de quienes cumplen esta medida en las distintas bartolinas policiales del país, así como en los demás recintos en los que se advierta dicha problemática.

Varias personas privadas de libertad demandaron en hábeas corpus a los jefes de Delegaciones Policiales de Quezaltepeque, San Vicente y Soyapango; así como a Jueces de Sentencia de Santa Tecla, Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla y Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador. Lo anterior debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran cumpliendo dichas restricciones a su libertad, lo que ha provocado enfermedades mentales, hongos en la piel, dolor de espalda porque duermen en el piso, malos tratos y golpes por parte de los agentes, y falta de comida y de agua.

El artículo 11 de la Constitución establece la tutela del derecho a la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas, por medio del hábeas corpus correctivo. En inspección judicial practicada por delegación de la Sala de lo Constitucional, se constató que las bartolinas de la policía de Quezaltepeque –donde se encontraba uno de los demandantes– tienen una dimensión de 10.12 metros cuadrados en la que permanecen entre 30 y 40 personas privadas de libertad, lo que significa que cada interno dispone de un espacio que oscila entre 0,34 centímetros cuadrados y 0,25 centímetros cuadrados. El juez delegado describió las condiciones de hacinamiento y para ocupar los espacios tienen colgadas varias filas de hamacas, las más altas cerca del techo; otros sentados o acostados en el piso de cemento. Comparten un sanitario y una pila para agua.

También se practicó inspección en las bartolinas policiales de San Vicente, específicamente en la que se encuentra otro de los demandantes; en el acta la Jueza delegada describió similares condiciones que la anterior: hacinamiento, insalubridad, carencias de agua y ventilación, y los internos permanecen en el piso. Mide 12 metros cuadrados y en ella hay 33 internos, lo que significa que cada uno dispone apenas de 0,33 centímetros cuadrados. Hay 15 hamacas y los demás duermen en el suelo. Tienen agua tres veces por semana. En la inspección realizada en las bartolinas de Soyapango, donde se encontraba otro de los demandantes, el Juez Ejecutor constató que a pesar de que sólo hay capacidad para alojar 75 privados de libertad, en realidad allí permanecen más de 400 personas.

Además del hacinamiento, la situación de los privados de libertad en las bartolinas policiales se agrava por las siguientes razones: a) la Ley Penitenciaria establece que tanto las detenciones provisionales como las penas deben cumplirse en centros penitenciarios; b) las delegaciones policiales y las bartolinas no están diseñadas para alojamiento de personas por períodos prolongados y por tanto carecen de los servicios básicos; c) impide la clasificación de los internos, lo que acarrea problemas de seguridad y de tratamiento; y d) el personal policial no está capacitado para la custodia directa de los reclusos, ni es parte de sus funciones naturales.

Comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional

Constatadas las condiciones descritas, la Sala de lo Constitucional declaró la existencia de vulneraciones al derecho fundamental a la integridad personal, debido a la privación de libertad en condiciones inhumanas de hacinamiento; así también por cumplir dichas privaciones de libertad en lugares no autorizados por la ley, y por no garantizarse el derecho a la salud de uno de los demandantes.

Consciente que aquellas condiciones no sólo se presentan en las bartolinas inspeccionadas, sino en el resto de bartolinas policiales y en los centros penitenciarios del país, la Sala de lo Constitucional declaró *la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario* y ordenó el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.

En la sentencia se hace referencia al Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas, elaborado por la OEA, en la que aparece que de 34 países, El Salvador se encuentra en la primera posición con el mayor porcentaje de ocupación de prisiones (299%), seguido por Bolivia (233%) y Haití (218%). El total de las prisiones salvadoreñas tienen una capacidad para 8,110 privados de libertad (según datos de 2010), y en la actualidad, según registros de la Dirección General de Centros Penales al 2 de mayo del presente año, habían 33,421 presos, entre procesados y condenados.

Se citan como referencia algunas decisiones de tribunales y organismos internacionales, tales como: a) la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que entre 120 y 300 personas reclusas en un espacio de 120 metros cuadrados son condiciones de hacinamiento; b) el Comité Internacional de la Cruz Roja en una guía complementaria al manual titulado “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles”, el valor mínimo para alojamiento en celda individual es de 5,4 metros cuadrados por persona y para alojamiento compartido es de 3,4 metros cuadrados por persona.

Con el fin de contribuir a superar la problemática carcelaria, se estableció en la sentencia que:

- i) Las autoridades competentes ordenen la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios o readecúen otros inmuebles estatales con características similares, por ejemplo, instalaciones militares, conservando siempre el modelo penitenciario previsto en la ley.
- ii) Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realicen urgentemente una labor de actualización e identificación de aquellos internos que ya no deban continuar detenidos por cumplimiento de la pena o que pueden, conforme a la ley, disponer de beneficios penitenciarios.
- iii) Los Equipos Técnicos Criminológicos, los Consejos Criminológicos Regionales y el Consejo Criminológico Nacional deben realizar dentro de los plazos legales, las evaluaciones y análisis de los condenados. Así también, deben remitir los informes correspondientes de manera inmediata a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de Pena.
- iv) Los jueces en materia penal deben considerar la aplicación de la detención provisional de manera excepcional, conforme lo contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; así como el Código Procesal Penal, tomando en consideración la gravedad de los hechos.
- v) La Fiscalía General de la República debe decretar detenciones administrativas cumpliendo rigurosamente los preceptos legales y acudiendo también al carácter excepcional de la medida.

Comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional

- vi) La Asamblea Legislativa debe establecer la competencia territorial de cada uno de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para que ejerzan control y vigilancia en las bartolinas policiales del país.
- vii) La administración penitenciaria en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deben realizar visitas periódicas médicas en los lugares de reclusión para evaluar o resolver las necesidades sanitarias.

Finalmente, la Sala anuncia la realización de audiencias públicas de seguimiento del cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades arriba identificadas. La sentencia fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González

San Salvador, 3 de junio de 2016